



Módulo: *“El Agente Penitenciario como Funcionario Público”*

Unidad N° 1 Material de Lectura.

En el ámbito del derecho penal, cada delito se fundamenta en la protección de un bien jurídico concreto. Se trata de identificar algo valioso, que merece una garantía legal ante la acción de un tercero. Entonces, para ejemplificar esta concepción, se puede decir que mientras el delito de homicidio protege el bien jurídico de la vida, el hurto lo hace con la propiedad privada.

Cuando se analiza la inclusión de la administración pública en un apartado de nuestro código penal, se puede afirmar también cual es el bien tutelado: **la regularidad funcional de los órganos del Estado.**

Sin negar la existencia de una controversia teórica, que en este curso no se va a desarrollar, se puede mencionar que la doctrina se ha expresado de forma mayoritaria al respecto, puntualizando que con la represión de tales delitos, regulando conductas de aquellos que son considerados funcionario público y de particulares en situaciones especiales, **se persigue proteger el normal funcionamiento de los órganos de gobierno.**

Cuando se habla de funcionario público (o empleo público) en el código penal argentino, se debe mencionar que este cuerpo legal en su art. 77° lo define como a **“todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente”.**

Por simple deducción, nos queda claro entonces que **el agente penitenciario de la provincia de Santa Fe es un funcionario público**, y por lo tanto, pasible de sanción penal cuando incurre en actos tipificados en dicho código.

Si analizamos el plexo normativo podemos encontrar dos grupos de delitos, en primer lugar los delitos propios de éstos, donde es imprescindible la existencia del funcionario público; y en el segundo conjunto donde la figura del funcionario se aplica como un agravante.



Por lo expuesto es preciso desarrollar el Libro II "De los Delitos", título XI denominado "Delitos contra la Administración Pública", aclarando que el concepto de administración pública se utiliza en sentido amplio, porque se incluye al personal de todos los poderes del Estado (P.E., P.L. y P.J.) y en todos sus niveles (Nacional, Provincial y Local)

Capítulo I "Atentado y resistencia contra la autoridad" Desde el art. 237 al 243.

En este caso, un particular afecta a la administración pública cuando manifiesta un atentado, la resistencia o desobediencia a la autoridad. El propósito de la normativa es garantizar la libertad de los agentes públicos al momento de tomar y ejecutar decisiones relativas a su función, es decir que no se vea estorbado en la realización de actos vinculados a los actos que debe desarrollar en su cargo.

El art. **237** expresa: "*Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que empleare **intimidación o fuerza contra un funcionario público** o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones*".

Por lo expuesto, la persona que presta asistencia a requerimiento del Funcionario Público también está considerada por la normativa.

Posteriormente en el art. **238** en los agravantes de la pena se puede observar en el inc.) "3 **Si el culpable fuere funcionario público**", para destacar que "*En el caso de ser funcionario público, el reo sufrirá además **inhabilitación especial por doble tiempo** del de la condena.*"

Prosiguiendo con el art. **239** se expresa que "*Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que **resistiere o desobedeciere a un funcionario público** en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.*"

Se puede verificar que, al principio, la normativa se enfoca en el atentado y en este último caso en la resistencia o desobediencia. En este caso es visible la protección fijada para que el funcionario público dicte órdenes en pleno ejercicio de su función y se intente



garantizan su cumplimiento; siempre y cuando sea en el ejercicio legítimo de sus funciones.

## Capítulo II "Falsa denuncia"

**Art. 245:** *"Se impondrá prisión de dos meses a un año o multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos al que **denunciare falsamente** un delito ante la autoridad."*

La denuncia es la principal forma de inicio de las causas penales, sumadas a las instruidas de oficio por autoridad competente. Por lo tanto para que no se inicien investigaciones sobre hechos inexistentes o simulados, se impone pena a toda persona que denuncie ante la autoridad de forma falsa.

## Capítulo III "Usurpación de autoridad, títulos u honores"

Se pondera que el funcionario público **no ejerza funciones para lo cual no está habilitado**, ya sea por título de competencia o de nombramiento. También se intenta evitar que el agente a pesar de cesar legalmente de su cargo continúe desarrollando funciones o bien asuma competencias de un cargo diferente al que ostenta.

*"1 El que **asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento** expedido por autoridad competente"*

*"2 El que **después de haber cesado** por ministerio de la ley en el desempeño de un cargo público o **después de haber recibido** de la autoridad competente comunicación oficial de la resolución que ordenó la **cesantía o suspensión de sus funciones, continuare ejerciéndolas**"*

*"3 El funcionario público que **ejerciere funciones** correspondientes a **otro cargo**"*

De esta forma la normativa delimita el campo de actuación, en espacio y tiempo del funcionario público.

## Capítulo IV "Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos"

En este caso la legislación penal insta a que el funcionario público encuadre su accionar a la normativa vigente.



## SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE SEGURIDAD

En primer término se prevé en la tipificación el supuesto donde el funcionario público no ejecute las leyes cuyo cumplimiento es de su incumbencia.

Por ello en el ART. **248.** se expresa: "*Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que **dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.***"

Posteriormente se plantea la **omisión ilegítima**, o cuando el funcionario se **rehusé a hacer o retarde un acto** de su oficio.

Por ello en el Art. **249** se esgrime: "*Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que **ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare** algún acto de su oficio*".

Siguiendo con el análisis de la normativa, se aborda la prestación de auxilio que las fuerzas públicas deben cumplimentar ante requerimiento de autoridad civil competente, marcando una relación de subordinación.

De esta forma se manifiesta en el art. **250.** "*Será reprimido con **prisión** de un mes a dos años e **inhabilitación** especial por doble tiempo, **el jefe o agente** de la fuerza pública, que **rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada**, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente*".

### Capítulo V "Violación de sellos y documentos"

En los posteriores artículos se menciona el **deber de cuidado** del funcionario público para la conservación de objetos, documentos y/o registros destinados para prueba ante autoridad competente, y de las medidas para garantizar su inalterabilidad.

En el Art. **254** se expresa: "*Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que **violare los sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservación o la identidad de una cosa.** Si el*



*culpable fuere funcionario público y hubiere cometido el hecho con abuso de su cargo, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo. Si el hecho se hubiere cometido por imprudencia o negligencia del funcionario público, la pena será de multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos."*

Posteriormente en el Art. **255** se manifiesta: "Será reprimido con prisión de un (1) mes a cuatro (4) años, el que **sustrajere, alterar, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba** ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público. Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo".

#### Capítulo VI "Cohecho y tráfico de influencias"

Se puede inferir que en los art. 256 al 268 se hace referencia a los delitos vinculados para lo que vulgarmente se conoce como corrupción de la administración, ante lo cual hay que tener presente que nuestro código no los clasifica de esa forma sino de la siguiente:

**COHECHO Activo**, para el caso del art. **256** donde se expresa para "el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, **recibiére dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta**, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones"

**COHECHO Pasivo**, para el caso del art. **256 bis** donde manifiesta "Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta **solicitare o recibiére dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia** ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones".

Como en los artículos posteriores se castiga también a los particulares que participan de estas maniobras, se visibiliza que se busca eliminar este tipo de prácticas para garantizar el buen funcionamiento de la administración.



**EL TRAFICO DE INFLUENCIAS** está regulado en la segunda parte del art. **256bis** donde se enuncia que *"Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a doce años"*.

Para cerrar esa cuestión también se **castiga la recepción de dadivas** en contraprestación al oficio habitual del funcionario, incluyendo al particular partícipe. Se expresa en el **Art. 259** *"Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo. El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año"*.

#### Capítulo VII "Malversación de caudales públicos"

En los artículos **260** al **264** se visibiliza el objetivo de **proteger la administración y la custodia de los caudales públicos**, los cuales deben ser utilizados según regula la normativa vigente y nunca para fines particulares.

En el art. **260** que expresa: *"Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que **diere a los caudales o efectos que administrar una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados**. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída"* por lo cual se pone énfasis al destino que se le otorgan a los fondos públicos.

En el art. **261** manifiesta que: *"Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que **sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada** por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública"*. En este artículo se exponen dos cuestiones, la sustracción y el uso particular



## SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE SEGURIDAD

indebido de bienes o el aprovechamiento de servicios que deberían ser de utilización pública.

En el art. **262** se esgrime *"Será reprimido con multa del veinte al sesenta por ciento del valor substraído, el funcionario público que, por **imprudencia o negligencia o por inobservancia** de los reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la **substracción de caudales o efectos** de que se trata en el artículo anterior"*, haciendo hincapié en el deber de custodia de dichos caudales.

### Capítulo VIII "Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas"

El Art. **265** expresa: *"Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se **interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero**, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo"*.

En este artículo se visibiliza el objetivo de garantizar la **transparencia** en las contrataciones y operaciones que ejecuta la administración.

### Capítulo IX "Exacciones ilegales"

El Art. **266** expresa: *"Será reprimido con prisión de un (1) a cuatro (4) años e inhabilitación especial de uno (1) a (5) cinco años, el funcionario público que, **abusando de su cargo, solicitar, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente**, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden"*.

En este supuesto el funcionario público infringe la ley penal con solo solicitar una contraprestación injustificada e ilegítima, efectuando abuso o mal uso de sus funciones.

### Capítulo IX bis "Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados"

En el art. **268** incisos 1, 2 y 3, se desarrolla este delito que se puede separar en tres partes.





## SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE SEGURIDAD

La primera hace mención a la utilización de información privilegiada a la cual tiene acceso por el cargo que ocupa, siendo pasible también beneficiar a un tercero: Art. **268 (1)** *"Será reprimido con la pena del artículo 256, el funcionario público que con **finés de lucro utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado** de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo."*

En segunda medida, el patrimonio del funcionario público ha demostrado un crecimiento desmedido, que ante requerimiento de autoridad competente no se puede justificar, aun utilizando un tercero (persona interpuesta), lapso que se inicia con la asunción al cargo y se limita a dos años posteriores a su fecha de cese. Se incluye también la cancelación de deudas de dicho patrimonio: Art. **268 (2)** *"Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años, multa de dos (2) a cinco (5) veces del valor del enriquecimiento, e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, **no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial** apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos (2) años después de haber cesado en su desempeño".*

En tercer y último término, se hace referencia a la rendición periódica del patrimonio personal del funcionario público que establece el organismo específico competente: Art. **268 (3)** *"Será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere **obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo**".*

### Capítulo X "Prevaricato"

A partir de este capítulo comienza los actos relacionados con la **administración de justicia**, en este artículo puntual en la acción del Juez cuando dictamina. Además se incluye a los abogados, mandatarios y fiscales que representan partes con intereses contrapuestos en el mismo proceso.





## Capítulo XI "Denegación y retardo de justicia"

En este caso se enfoca en la **labor del juez** cuando se niega a juzgar so pretexto de obscuridad, insuficiencia o silencio de la ley o se retarde de forma maliciosa la administración de justicia cuando ya fue requerido por las partes.

La ley que regula el proceso otorga tiempos en la etapa de dictar sentencia o fallo, el código penal busca que no haya demoras injustificadas en que los magistrados dicten sus resoluciones en tiempo y forma.

Posteriormente se incluye a **todo funcionario público que tiene como tarea promover la represión y persecución de delincuentes.**

## Capítulo XII "Falso testimonio"

Las situaciones previstas en este capítulo se vinculan con la **actividad que tienen los testigos, peritos e intérpretes** cuando actúan dentro de un legajo judicial, buscando que éstos no lo hagan ocultando la verdad, o efectuando afirmaciones falsas.

Se resalta que representan el modo de prueba mayormente utilizado en los casos judiciales, por lo tanto se debe garantizar que no contamine o perjudique el proceso y su respectiva resolución.

## Capítulo XIII "Encubrimiento"

Ante la comisión de un acto delictivo, se busca que las personas ajenas al hecho no obstruyan a la investigación y en especial brindar ayuda al autor del delito para obtener provecho del mismo.

En el art. **277** se expresan los siguientes supuestos:

- a) "Ayudare a alguien a **eludir las investigaciones** de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta".
- b) "Ocultare, alterar o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer".



## SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE SEGURIDAD

c) *"Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito".*

d) *"No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole".*

e) *"Asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito".*

**Art. 279.** *"3) Cuando el autor de los hechos descriptos en los incisos 1 o 3 del artículo 277 fuera un funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años".* La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requieran habilitación especial.

### Capítulo XIV "Evasión y quebrantamiento de pena".

Cuando un órgano judicial determina una pena de prisión o la inhabilitación se debe garantizar su cumplimiento por ello es que resulta punible la evasión utilizando la violencia sobre las personas o la fuerza sobre las cosas.

Se tiene en cuenta a la persona que se evade, a la que facilita a la evasión, con agravante para el funcionario público, y a la que produce quebrantamiento de la pena de inhabilitación judicial.

**Art. 280.** *"Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hallándose legalmente detenido se **evadiere por medio de violencia** en las personas o fuerza en las cosas".*

**Art. 281** *"Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que **favoreciere la evasión** de algún detenido o condenado, y si fuere funcionario público, sufrirá, además, inhabilitación absoluta por triple tiempo".*

*"Si la evasión se produjere por negligencia de un funcionario público, éste será reprimido con multa de pesos argentinos mil a pesos argentinos quince mil".*

**Art. 281 bis** *"El que quebrantare una inhabilitación judicialmente impuesta será reprimido con prisión de dos meses a dos años".*



### **Conclusión:**

Como se mencionó al principio de la lectura, el código penal busca garantizar el normal funcionamiento de la administración pública, regulando acciones de los funcionarios públicos y particulares para dicho objetivo.

Si bien las penas expresadas en la escala de los delitos del código no son las mayores, se debe tener en cuenta que la condición de funcionario público amerita un agravante, sin menospreciar la pena de inhabilitación especial impuesta para no continuar en el cargo.